

Reclamación nº 21/2020

Acuerdo de 20 de enero de 2020 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid sobre la suspensión de la tramitación del expediente de contratación “Servicio de mantenimiento integral de 205 salidas de emergencia y vías de evacuación de la red de Metro de Madrid (Lotes 1 y 2)”. Número de expediente: 6011900180.

El 15 de enero de 2020 se ha recibido en este Tribunal escrito de la representación de la empresa Control y Montajes Industriales CYMI, S.A, formulando reclamación contra el Acuerdo de la Mesa de contratación de Metro de Madrid, por el que se excluye a la reclamante de la licitación de los lotes 1 y 2 del expediente mencionado.

En la reclamación se solicita que se acuerde la suspensión del procedimiento de adjudicación en virtud de lo previsto en el artículo 104.5 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (en adelante, LCSE), que establece: *“En el escrito de interposición se hará constar el acto reclamado, el motivo que fundamenta la reclamación, los medios de prueba de que pretende valerse el reclamante y en su caso las medidas cautelares mencionadas en el artículo anterior, cuya adopción solicite.”*

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el*



contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado tanto el recurso especial en materia de contratación como la reclamación, tienen como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto de reclamación, cuando el estado avanzado en la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación muy similar o incluso ya con la adopción de la decisión de adjudicación.

Dado el estado de tramitación del expediente sería posible llegar a la adjudicación del contrato con anterioridad a la resolución de la reclamación, motivo por el cual este Tribunal considera que debe permitir la continuación del expediente y a la vez garantizar que no se celebre el contrato sin que se haya decidido sobre el fondo del



asunto. Por ello, debe pronunciarse motivadamente sobre la medida cautelar solicitada.

A la vista de lo anterior este Tribunal considera que con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación, se evita que con la posible adjudicación del contrato se puedan causar otros perjuicios a los interesados afectados y especialmente al licitador propuesto como adjudicatario, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción y se evita que se produzcan situaciones que pudieran derivar en indemnizaciones a los perjudicados.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.3 LCSE, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del expediente de contratación “Servicio de mantenimiento integral de 205 salidas de emergencia y vías de evacuación de la red de Metro de Madrid (Lotes 1 y 2)”, número de expediente: 6011900180, hasta que se resuelva la reclamación y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

